

y remítanse originales los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El Juez de Distrito de Sonora así lo decretó definitivamente, firmándolo con los testigos de su asistencia ordinaria.—*D. Elias G.—A.—P. del Rincon.—A.—Pastor Rodriguez.*

Es copia de su original que certifico.

Guaymas, Octubre 5 de 1873.—*Elias G.—P. del Rincon.—Pastor Rodriguez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 6 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por los CC. Andrés Fenechio, Francisco Schober, Plutarco Elias, Hilario Gabilondo, Miguel García y David Spense, empleados de la Aduana marítima de Guaymas, ante el Juzgado de Distrito de Sonora, contra la aplicacion del decreto de 6 de Octubre del año próximo pasado expedido por el Ejecutivo del mismo, facultado por la Legislatura; que impuso una contribucion de treinta y cinco mil pesos, repartida proporcionalmente entre los vecinos del Estado, para sofocar la sublecion de Alamos, con cuyo acto, alegan los quejosos, que se infringe el artículo 72 Constitucional en su fraccion 11.

Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; lo pedido por el C. Promotor y todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente; y

Considerando: que es atribucion expresa del Congreso de la Union; aumentar ó disminuir las dotaciones de los empleados de la federacion, y que al hacer extensivas las contribuciones de los Estados á estos, se invaden las atribuciones de la federacion; con fundamento del artículo citado y de los 101 y 102 constitucionales, y de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

1º Que es de revocarse y se revoca la sentencia del inferior, que declaró que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los

quejosos, contra el acto de que se quejan, y se declara:

2º Que la Justicia de la Union ampara y protege á dichos CC. contra la aplicacion del impuesto decretado por el Gobierno del Estado.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*J. M. Iglesias.—Juan J. de la Garza.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Anza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavala.—J. Garcia Ramirez.—Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 24 de 1874.—*Inc. Emilio Ordaz*, Oficial mayor interino.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas, por el C. Francisco Palacios, contra la providencia dictada por el Gefe político del departamento de Soconusco, por violacion de garantías.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Cristobal las Casas, Noviembre 4 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Francisco Palacios, expresando estar violadas en su persona las garantías que otorgan los artículos 5º y 27 de la Constitucion federal, con la providencia que el C. Gefe político del departamento de Tapachula, dictó el 20 de Mayo del corriente año, previniéndole que desembrazase el camino que conduce de la Ciu-

dad de aquel nombre, al puerto de San Benito, el cual *ha obstruido con cercas de piedra, dejándole enteramente libre y expedito y se abstenga en lo sucesivo de cobrar peaje á los transeuntes.* Visto lo expuesto por la autoridad informante, con los documentos en que se apoya; la prueba rendida por las partes, y lo alegado por las mismas; el auto de suspension del acto reclamado y cuanto mas verse debia.

X considerando: que para que pueda decirse que el acto reclamado viola el artículo 5º de la Constitución, era preciso que la autoridad exigiera la prestación de servicios personales, sin la competente indemnización; circunstancias que no contiene la prevención que motiva este juicio, por cuanto se limita á prevenir al quejoso que no haga cobros injustos á los transeuntes del camino nacional, como se expresa en el informe respectivo, sin que mande prestar á estos ningún género de servicios, bajo ningún concepto. Como aparece de la misma providencia, que tiende á evitar solamente el cobro de peaje á los transeuntes del camino nacional, que aunque se halla incrustrado en la propiedad del quejoso, confiesa haberlo cedido al público.

Considerando: que la providencia reclamada no prohíbe al quejoso el derecho que tenga de celebrar contratos con ningún particular, por proporcionarles canoas para pasar el fango cuando se lo soliciten, ni le impone la obligación de prestar este ni otro servicio gráti.

Considerando: que para que se tenga por violado el artículo 27 de la Constitución, se necesita que se haga ocupación de la propiedad particular sin consentimiento del propietario, sin previa indemnización, y sin los demás requisitos legales, circunstancias que no ha probado el promovente, pues ni la providencia reclamada marca el lugar que ha de dejarse expedito á los transeuntes, ni el quejoso ha demostrado que este correspondiera á su propiedad, quedando fuera del trazo del camino nacional, único

á que se refiere la providencia reclamada, segun se deduce de las palabras *DESEMBA-RACE EL CAMINO*, refiriéndose al del puerto, sin hacer ninguna mención sobre que deje paso en terreno de su propiedad, á los que caminen para el puerto.

Considerando finalmente: que la providencia reclamada, no importa sino un apercibimiento de guardar los debidos respetos á los derechos legítimamente adquiridos para el público, para el tráfico del camino nacional, segun resulta del texto de la providencia, sobre la cual, no debe este Juzgado admitir interpretaciones de las partes para resolver.

Con presencia de lo expuesto y de lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, y 13, 16 y 27 de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: 1º la Justicia federal, no ampara ni protege al C. Francisco Palacios, contra la providencia que dictó el C. Jefe político del departamento de Soconusco, el 20 de Mayo último, relativa á no cobrar peaje ni impedir el paso del camino á los transeuntes para el puerto de San Benito; 2º: se declara incurso en la multa que señala el artículo 16 de la citada ley de 20 de Enero, y en la obligación de reponer el papel sellado dejado de usar; 3º: apercíbese para que en sus ocursos guarde el debido respeto á las autoridades.

Hágase saber, compúlsense las copias respectivas para su publicación, y elévense estos autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su revisión. Así lo provee y firma el C. Juez ante los de asistencia que certifican.—*Fernando Zepeda.*—*D. A.*—*Manuel S. Pineyro.*—*D.*—*A.*—*Francisco Román.*

Es copia que certificamos los de asistencia.—*Francisco Román.*—*Manuel S. Pineyro,*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 6 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas, por el C. Francisco Palacios, manifestando haberse violado en su persona las garantías consignadas en los artículos 5º y 27 de la Constitución federal, en la providencia dictada por el Gefe político, del departamento de Soconusco, ordenando al quejoso que desembarasase el camino que conduce de la Ciudad de Tapachula al puerto de San Benito, el cual había obstruido con unas cercas, y que se abstuviera en lo sucesivo de cobrar peaje á los transeuntes. Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; las pruebas rendidas; lo alegado por las partes; la sentencia del inferior que negó el amparo, y todo lo demas que debió verse.

Considerando: que de autos consta por confesion del mismo quejoso, que la anchura que ha tenido el camino que conduce de la Ciudad de Tapachula al puerto de San Benito, ha sido de 25 varas; que el quejoso no ha podido ocupar ninguna parte del terreno comprendido dentro de las 25 varas referidas; que de la averiguacion manda la practicar por el Gefe político, aparece que el C. Francisco Palacios, ha ocupado parte del camino, pues que al poner las cercas, aquel quedó reducido á ocho varas de anchura. Que si bien el mismo C. Palacios no tiene derecho á cobrar peaje por solo el tránsito, si lo tiene á que se le remunere cuando los transeuntes voluntariamente quieran hacer uso de las canoas propias del citado Palacios; que á pesar de que el camino se inunde en la estacion de aguas haciéndose por ésta causa difícil su tránsito, esto no dá derecho á que sean ocupados los terrenos que no forman parte del camino.

Por todos estos fundamentos, y de acuerdo con lo prevenido en la frac. 1ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que es de reformarse y se refor-

ma la sentencia del inferior en los términos siguientes; 1º: La Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Francisco Palacios, contra la órden del C. Gefe político del departamento de Soconusco, por la parte de terreno que haya obstruido dentro de las 25 varas de anchura que ha tenido el camino que conduce de la Ciudad de Tapachula al puerto de San Benito; 2º: La Justicia de la Union ampara y protege al mismo C. Palacios, en el cobro que exige á los transeuntes, por solo el uso que estos hagan de las canoas pertenecientes al mismo Palacios.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogaszon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Najera.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México Febrero 6 de 1874.—*Enrique Landa.*